



Asamblea General

Distr. general
25 de julio de 2013
Español
Original: inglés

**Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 66º período de sesiones
(29 de abril a 3 de mayo de 2013)**

Nº 4/2013 (Uzbekistán)

Comunicación dirigida al Gobierno el 5 de diciembre de 2012

Relativa a: Gaybullo Jalilov

El Gobierno respondió a la comunicación el 28 de marzo de 2013.

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue especificado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/16/47, anexo), el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno la comunicación arriba mencionada.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los

Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los derechos humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. El Sr. Gaybullo Jalilov (en adelante, el Sr. Jalilov), ciudadano uzbeko nacido el 24 de agosto de 1964, es un activista de los derechos humanos que vive y opera en Karshi. También es miembro de la Sociedad de Derechos Humanos de Uzbekistán.

4. La labor del Sr. Jalilov se centraba en las violaciones del derecho a la libertad religiosa, en particular en la persecución de musulmanes independientes en la región uzbeka de Kashkadarya. Desde 2004, sigue los casos de persecución religiosa, y en el momento en que se produjo su detención en septiembre de 2008 había recabado información de más de 200 detenciones de musulmanes independientes en la región.

5. El 5 de septiembre de 2009, cerca de las 10 de la noche, varios hombres, dos de los cuales vestían al parecer uniforme policial, habrían metido a la fuerza al Sr. Jalilov en un vehículo cuando volvía a casa después de visitar a otro defensor de los derechos humanos.

6. Según la fuente, el Sr. Jalilov estuvo retenido en un principio en régimen de incomunicación y sus amigos y familiares no tenían modo de saber dónde se le recluía; transcurrieron dos días hasta que tuvieron noticias de su paradero.

7. El 10 de septiembre de 2009, en torno a las 7 de la mañana, según informa la fuente, 18 agentes de policía del Departamento del Interior de la ciudad de Karshi se presentaron en el domicilio del Sr. Jalilov, entregaron a su mujer una orden de allanamiento y registraron la casa. La policía se incautó presuntamente de una copia de un libro titulado "Hacia el honor y el respeto" (*Izzat va sharaf sari*) y dos DVD que había en la casa del Sr. Jalilov.

8. De acuerdo con la fuente, el 23 de septiembre de 2009, el padre del Sr. Jalilov recibió un escrito del Departamento del Interior de la ciudad de Karshi en el que se le informaba de los delitos imputados a su hijo. Las autoridades de Karshi acusaban al Sr. Jalilov y a otros tres hombres de una serie de delitos, con cargos de extremismo religioso, presuntamente amañados, en particular su hipotética pertenencia al grupo religioso Hizb ut-Tahrir, que, según se informa, tiene una agenda extremista y separatista. Al Sr. Jalilov se le acusaba de terrorismo; incitación al odio étnico, racial o religioso; sabotaje; "organización de una comunidad delictiva"; producción y difusión de materiales con amenazas a la seguridad y el orden públicos; y establecimiento, dirección o participación en una organización religiosa extremista, separatista, fundamentalista o en otra organización prohibida.

9. La fuente indica que la familia y el abogado del Sr. Jalilov tuvieron ocasión de reunirse con el Sr. Jalilov por primera vez desde su detención el 6 de noviembre de 2009. Según la fuente, en la sala había tres agentes de policía y, por eso, el Sr. Jalilov no pudo hablar con libertad con sus familiares o su asesor letrado.

10. La primera vista del Sr. Jalilov empezó el 24 de noviembre de 2009 en el tribunal regional de Kashkadarya. Al abogado del Sr. Jalilov no se le habría notificado la vista presuntamente y por eso no pudo asistir. La vista acabó y supuestamente no se permitió el acceso a la sala a ningún familiar del Sr. Jalilov. Según la fuente, el tribunal, en repetidas ocasiones, y durante el resto del juicio no comunicó a su abogado información sobre las fechas de las vistas.

11. La Fiscalía afirmó que el Sr. Jalilov había dicho que el Gobierno era contrario a la religión y estaba encarcelando ilegalmente a musulmanes practicantes y que la única solución a todos los problemas de la sociedad era sustituir al actual Gobierno.

12. La fuente sostiene que durante el juicio el Sr. Jalilov negó las acusaciones y proclamó su inocencia en relación con tales cargos. Según se informa, declaró que pronunciaba las oraciones diarias que son preceptivas en el islam y que había aprendido a rezar con el imam de la mezquita de Ko'kgumbaz; además alegó haber sido detenido en un principio por practicar la oración que es preceptiva en el islam. Al parecer, el Sr. Jalilov también afirmó ante el tribunal no ser miembro de Hizb ut-Tahrir y no estar implicado en ningún grupo terrorista o en ninguna actividad para derrocar al Gobierno.

13. Según la fuente, las autoridades trasladaron la última vista del Sr. Jalilov a Bujará (a unos 150 km), sin notificarlo a su abogado o sus familiares, quienes por consiguiente no pudieron estar presentes.

14. El 18 de enero de 2010, el tribunal penal regional de Kashkadarya condenó al Sr. Jalilov y a los otros tres acusados a penas de prisión de entre 7 y 10 años. El Sr. Jalilov fue condenado a 9 años de encarcelamiento en virtud de los artículos 159.3 b), 244.3 a) y b) y 244.1 del Código Penal de Uzbekistán. La fuente sostiene que la condena del Sr. Jalilov se basaba íntegramente en testimonios escritos imprecisos y no se correspondía con los delitos que se le imputaban.

15. Según la fuente, durante la instrucción, el Sr. Jalilov también firmó bajo coacción una confesión cuyo contenido ignoraba. Varios agentes del Servicio Nacional de Seguridad amenazaron presuntamente a la mujer del Sr. Jalilov e intentaron obligarla a testificar contra su marido. La fuente sostiene que el tribunal no ordenó que se investigaran las denuncias de tortura y malos tratos presentadas por el Sr. Jalilov, sino que afirmó que se habían inventado estas denuncias con el fin de eludir la responsabilidad penal.

16. El 9 de marzo de 2010, el tribunal regional de apelaciones de Kashkadarya confirmó la condena a nueve años impuesta al Sr. Jalilov en una vista que según se alega solo duró 20 minutos. Al parecer, la sentencia del tribunal de apelaciones no entra en ningún momento a analizar si existieron violaciones en cuanto al fondo o de forma, sino que se limita a copiar palabra por palabra la sentencia del tribunal de primera instancia.

17. El 20 de mayo de 2010, la familia del Sr. Jalilov intentó visitarlo en prisión. Al llegar a la penitenciaría UYa 64/49 en Shaikhali, tuvieron conocimiento de que se le había trasladado a Tashkent. Según la familia, no se les explicó ni los motivos ni la fecha de su traslado.

18. El 7 de junio de 2010, la mujer del Sr. Jalilov remitió una petición por escrito al director de la administración penitenciaria (GUIN) para solicitar información sobre el paradero de su marido, pero al parecer no obtuvo respuesta alguna. La fuente afirma que, unas seis semanas después, la mujer del Sr. Jalilov viajó a Tashkent para buscarlo, y el 23 de julio el organismo de administración penitenciaria le informó de que su marido estaba recluido en una celda de detención preventiva en Bujará.

19. Según la fuente, el Sr. Jalilov llamó a su mujer el 27 de julio de 2010 para decirle que el Gobierno le había acusado de nuevos delitos y que se encontraba en una dependencia de instrucción en el distrito de Kasbi en Kashkadarya. Al parecer, en ningún momento ni

las autoridades penitenciarias ni el instructor notificaron oficialmente a la familia del Sr. Jalilov que se le estaba investigando para acusarle de nuevos delitos. Según se informa, el Sr. Jalilov no pudo hacerse con los servicios de un abogado de su elección y no tuvo otro remedio que aceptar estar representado por un abogado de oficio.

20. El 4 de agosto de 2010, el tribunal regional de Kashkadarya empezó a examinar las nuevas acusaciones presentadas contra el Sr. Jalilov. Según la fuente, la Fiscalía basó sus nuevas acusaciones en testigos que afirmaban que el Sr. Jalilov había participado activamente en reuniones religiosas y había visto algunos DVD con contenido religioso extremista. En una vista a puerta cerrada, el tribunal penal regional de Kashkadarya volvió a condenar al Sr. Jalilov a 11 años, 1 mes y 5 días de prisión por violar los artículos 159.3 b) y 244.1 del Código Penal de Uzbekistán. Según las informaciones, los familiares del Sr. Jalilov presentes en la vista afirmaron que el Sr. Jalilov había proclamado su inocencia en todas las imputaciones y había solicitado a la Fiscalía que presentara sus testigos, quienes, al parecer, no comparecieron.

21. Según la fuente, el Sr. Jalilov sufrió malos tratos y posibles actos de tortura. La denuncia se basa en el aspecto del Sr. Jalilov cuando compareció en la vista de apelación, ya que presentaba un ojo morado. Informó de que un agente le había propinado patadas y puñetazos en su celda. Anteriormente, el Sr. Jalilov ya había exhibido evidentes signos de malos tratos. Presuntamente, intentó suicidarse en 2009.

22. La fuente sostiene que la detención del Sr. Jalilov por acusaciones de extremismo religioso constituye una detención arbitraria de categoría II, tal y como la define el Grupo de Trabajo.

23. La fuente alega que el Gobierno de Uzbekistán negó al Sr. Jalilov el derecho a la libertad de religión según figura en el artículo 18, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La fuente confirma que el Sr. Jalilov profesa el islam, y mantiene que el Gobierno de Uzbekistán usó la declaración del Sr. Jalilov relativa a su religión para imputarle delitos de extremismo religioso y acusarle de pertenencia al grupo religioso Hizb ut-Tahrir. Según la fuente, el Sr. Jalilov proclamó su inocencia en todas las imputaciones y testificó que había confesado pertenecer a Hizb ut-Tahrir bajo coacción y tortura. En opinión de la fuente, la Fiscalía no había demostrado ni la pertenencia del Sr. Jalilov al grupo Hizb ut-Tahrir ni las otras acusaciones de actividades anticonstitucionales. Asimismo, según la fuente, en la sentencia no se hizo referencia alguna a la ley que prohíbe pertenecer al grupo Hizb ut-Tahrir.

24. A falta de pruebas de que el Sr. Jalilov estuviera implicado en las presuntas actividades delictivas, la fuente sostiene que el Gobierno detuvo y condenó al Sr. Jalilov únicamente por el hecho de haber practicado y estudiado por su cuenta la religión, lo que constituyó una violación de su legítimo derecho a la libertad de religión consagrado en el artículo 18, párrafo 1, del Pacto.

25. A juicio de la fuente, la detención del Sr. Jalilov viola además el artículo 19, párrafo 2, del Pacto. La fuente alega que la trayectoria del Sr. Jalilov en el activismo en favor de los derechos humanos lo convertía en un objetivo para el Gobierno porque, como miembro de la Sociedad de Derechos Humanos de Uzbekistán, su labor se centraba en investigar y denunciar la persecución contra los musulmanes independientes en la región uzbeka de Kashkadarya.

26. Según la fuente, en el momento en que se produjo su detención en septiembre de 2008, el Sr. Jalilov había recabado información de más de 200 detenciones de musulmanes independientes en la región. Al parecer, este ejercicio de sus derechos con arreglo al artículo 19, párrafo 2, del Pacto fue lo que desembocó en las acusaciones de extremismo religioso, y, en efecto, su detención arbitraria supuso una violación de su legítimo derecho a la libertad de expresión.

27. La fuente sostiene que la detención del Sr. Jalilov por acusaciones de extremismo religioso constituye una privación de libertad arbitraria de categoría III, según la define el Grupo de Trabajo.

28. La fuente sostiene que el Sr. Jalilov no pudo ponerse en contacto presuntamente con un abogado tras su detención inicial el 5 de septiembre de 2009. De acuerdo con la fuente, la primera vez que el Sr. Jalilov pudo reunirse con su abogado fue el 6 de noviembre de 2009, dos meses después de su detención.

29. Se le mantuvo recluido en régimen de incomunicación y ni su familia ni sus amigos recibieron notificación alguna de su paradero. La primera vista del Sr. Jalilov comenzó el 24 de noviembre de 2009 en el tribunal regional de Kashkadarya y la fuente sostiene que no se notificó a su abogado y que no se permitió la presencia de la familia. Por eso, nadie pudo asistir a la vista para defender los intereses del Sr. Jalilov. El tribunal siguió presuntamente negando al abogado del Sr. Jalilov información sobre las fechas de las vistas durante todo el juicio.

30. La fuente alega además una violación del artículo 14, párrafo 1, del Pacto; del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 19 del Código de Procedimiento Penal de Uzbekistán, que garantizan el derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial. Al parecer, la primera vista del Sr. Jalilov el 24 de noviembre de 2009 fue a puerta cerrada o no se notificó a nadie que fuera a celebrarse, por lo que ni familiares ni abogado pudieron asistir. Es más, la vista final fue trasladada de Karshi a Bujará sin notificarlo a su familia o a su abogado. La fuente sostiene que al no compartir información sobre las vistas del Sr. Jalilov con su familia o su abogado o al celebrar vistas a puerta cerrada, el Gobierno de Uzbekistán conculcó el legítimo derecho del Sr. Jalilov a un juicio público e imparcial.

31. La fuente también mantiene que, al negar al Sr. Jalilov el derecho a interrogar a los testigos de cargo durante el juicio, el tribunal violó además el artículo 14, párrafo 3, del Pacto. Según la fuente, la Fiscalía se basó exclusivamente en testimonios escritos obtenidos durante la instrucción, supuestamente vagos e irrelevantes. El tribunal de primera instancia ignoró presuntamente la solicitud reiterada del Sr. Jalilov para que la Fiscalía presentara sus testigos durante el juicio.

32. La fuente alega igualmente una violación del artículo 14, párrafo 5, del Pacto y del artículo 510 del Código de Procedimiento Penal. El tribunal de apelaciones de Uzbekistán examinó el caso del Sr. Jalilov en una vista que al parecer no duró más de media hora y confirmó la condena a nueve años impuesta al Sr. Jalilov. Según la fuente, la sentencia del tribunal de apelaciones no analiza en ningún momento los aspectos sustantivos o procesales, sino que copia palabra por palabra la sentencia del tribunal de primera instancia. Por eso, la fuente expresa su preocupación por que el alto tribunal no actuara como árbitro independiente e imparcial.

33. La fuente alega igualmente una violación del artículo 14, párrafo 2, del Pacto; del artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 23 del Código de Procedimiento Penal de Uzbekistán. En opinión de la fuente, el tribunal no demostró la culpabilidad del Sr. Jalilov más allá de toda duda razonable. La fuente alega que el tribunal debería haber usado las presuntas irregularidades durante la instrucción y el juicio al Sr. Jalilov como fundamento para concederle el beneficio de la duda.

34. En relación con los presuntos malos tratos y actos de tortura contra el Sr. Jalilov, la fuente alega violaciones del artículo 7 del Pacto, del artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del principio 6 del Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. La fuente señala igualmente la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a la que Uzbekistán se adhirió el 28 de octubre de 1995. Asimismo, la

Constitución y el Código Penal de Uzbekistán prohíben la tortura y obligan a los tribunales a investigar las denuncias de tortura.

Respuesta del Gobierno

35. En su respuesta del 28 de marzo de 2013, el Gobierno sostiene que las denuncias formuladas en la comunicación no son ciertas, facilitando al Grupo de Trabajo la siguiente información.

36. El Sr. Jalilov fue detenido el 9 de septiembre de 2009 de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación uzbeka, que respeta plenamente el artículo 9 del Pacto.

37. El Sr. U. Djumaev, abogado que representaba los intereses del Sr. Jalilov, pudo participar en el caso desde el momento de su detención, con arreglo al artículo 46 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

38. A los familiares del Sr. Jalilov se les informó de su detención de acuerdo con los requisitos del CPP. En virtud del artículo 230 del CPP, una persona detenida puede reunirse con sus familiares únicamente con la autorización por escrito del instructor.

39. El 10 de septiembre de 2009, tras presentar una orden de allanamiento, unos oficiales del Departamento del Interior de la región de Kashkadarya registraron la casa y encontraron los libros *Izzat va Sharaf* y *Ta'siri Hilol*, entre otros (25 copias en total), y 39 DVD.

40. La instrucción, que se desarrolló con la participación del Sr. U. Djumaev, quien a su vez pudo comunicarse sin restricciones con el Sr. Jalilov, demostró que era miembro del grupo religioso extremista "Jihad Islámica" y que propagaba sus ideas de subvertir el orden constitucional, cambiar el Gobierno, etc.

41. El 18 de enero de 2010, el tribunal regional de Kashkadarya impuso al Sr. Jalilov su primera condena a nueve años de encarcelamiento en virtud del artículo 159.3 b), el artículo 2442 a) v) y el artículo 2441.1 del Código Penal. El órgano de apelación confirmó la sentencia el 9 de marzo de 2010. El Sr. Jalilov y los demás fueron declarados culpables de pertenecer a un grupo religioso extremista, de constituir un grupo criminal organizado con el fin de difundir el extremismo religioso, y de dirigir este grupo, cuyo principal objetivo era hacerse con el poder derrocando a un gobierno elegido legalmente, así como de reclutar a nuevos miembros.

42. Los testigos Sh. Ismailov, T. Majitov y J. Nuritdinov, entre otros, declararon que el Sr. Jalilov había expresado su malestar con las acciones del Gobierno y propagado ideas de cambiarlo.

43. La causa contra el Sr. Jalilov y los demás fue dirimida en juicio público con la participación de los abogados E. Turaboeva, Z. Eshonkulova, K. Abraev, R. Annaev, U. Djumaev, I. Saodatova y M. Parpieva y con la presencia de los familiares de los acusados.

44. Durante las diligencias de la apelación, ni el Sr. Jalilov ni sus abogados presentaron petición alguna para solicitar nuevos interrogatorios a los testigos.

45. En relación con las denuncias de que las autoridades trasladaron la vista del Sr. Jalilov a Bujará (a unos 150 km) sin notificarlo a su abogado o sus familiares, quienes posteriormente no pudieron asistir a la vista final, el Gobierno explicó que, a causa de la remodelación de la dependencia de instrucción en la ciudad de Karshi, durante la instrucción el Sr. Jalilov estuvo detenido en Bujará, en donde se celebró la segunda vista. La vista se desarrolló con la participación de los abogados U. Djumaev y M. Parpieva, quienes defendieron sus derechos. Los familiares del Sr. Jalilov asistieron a la vista.

46. El Gobierno sostiene que las denuncias de que el Sr. Jalilov firmó su declaración bajo coacción porque agentes del Servicio Nacional de Seguridad amenazaron a su mujer y la obligaron a declarar contra su marido no se ajustan a los hechos. Según el Gobierno, la instrucción se desarrolló de acuerdo con la legislación procesal penal. Durante las vistas, el Sr. Jalilov afirmó en repetidas ocasiones que durante la instrucción no se le coaccionó. Su mujer no manifestó haber sido amenazada para obligarla a testificar contra su marido.

47. En cuanto a la acusación de que no se le explicara a la familia los motivos o el momento del traslado del Sr. Jalilov de la penitenciaría UYa 64/49 en Shaikhali a Tashkent, el Gobierno informa al Grupo de Trabajo de que el Sr. Jalilov no estaba recluido en la UYa 64/49 (Shaykhali) sino en la UYa 64/48 (en la ciudad de Zarafshan, provincia de Navoiy). Los familiares del Sr. Jalilov no se pusieron en contacto con la administración de la UYa 64/49 para interesarse por su paradero. Según el Gobierno, ningún familiar del Sr. Jalilov se quejó al Departamento de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior de Uzbekistán.

48. En relación con las otras acusaciones contra el Sr. Jalilov, el Gobierno informa al Grupo de Trabajo de que se le imputaron nuevos delitos en enero de 2010. El 4 de agosto de 2010, el tribunal penal regional de Kashkadarya condenó al Sr. Jalilov a 12 años de encarcelamiento en virtud de los artículos 159.3 b) y 244.1 del Código Penal de Uzbekistán. El 28 de septiembre de 2010, el órgano de apelación confirmó la sentencia.

49. De acuerdo con la sentencia, el Sr. Jalilov fue declarado culpable de pertenecer a un grupo religioso extremista, uniéndose a un grupo criminal organizado, algunos de cuyos miembros eran representantes de organizaciones terroristas internacionales, como T. Yuldashev, A. Mirzaev y O. Nazarov, entre otros, que perseguían difundir opiniones extremistas y llamaban a derrocar el Gobierno; también fue declarado culpable de reclutar nuevos miembros y distribuir materiales con el contenido mencionado anteriormente (material escrito y audiovisual).

50. El juicio fue público y el Sr. Jalilov estuvo representado por el Sr. V. Hudoyarov. Se demostró la culpabilidad del Sr. Jalilov sobre la base de los testimonios de K. Turaev, I. Rahimov, G. Lutfiev, D. Karimov, A. Kurbanov, B. Kurbonov y B. Sharipov y de las conclusiones obtenidas del estudio del sumario.

51. Al ingresar en prisión, se le explicó al Sr. Jalilov el reglamento interno y se le asignó un trabajo. Las pruebas médicas periódicas revelaron que padecía una bronquitis crónica en fase de remisión. Del 23 de octubre de 2012 al 22 de noviembre de 2012, recibió tratamiento por una bronquitis-neumonía y una hepatitis. En estos momentos, no necesita ningún tratamiento médico.

52. El Gobierno informa al Grupo de Trabajo de que, en relación con las declaraciones del Relator Especial del Grupo de Trabajo sobre su detención arbitraria, el Sr. Jalilov afirmó lo siguiente: durante el encuentro con su esposa el 27 de junio de 2010, le informó de que se estaba abriendo una nueva causa penal contra él. Durante la instrucción del caso, el Gobierno le asignó un abogado porque no tenía fondos para costearse el suyo propio, y no se le sometió ni a torturas ni a malos tratos.

53. En relación con las denuncias de malos tratos y posibles actos de tortura, el Gobierno sostiene que no son ciertas, puesto que su examen muestra que ningún miembro de las fuerzas del orden cometió acto ilegal alguno, como torturas o malos tratos, contra el Sr. Jalilov. Asimismo, durante los juicios, ni el Sr. Jalilov ni sus abogados ni sus familiares denunciaron que se le hubiera sometido a tortura u otras formas de malos tratos. En prisión, el Sr. Jalilov no intentó suicidarse.

54. En relación con las presuntas violaciones inscritas en las categorías II y III, el Gobierno mantiene que el artículo 18, párrafo 3, prevé limitaciones lícitas. El Sr. Jalilov era

miembro activo de un grupo religioso extremista, cuyo principal objetivo era derrocar al Gobierno actual.

55. Además de ser parte en el Pacto, Uzbekistán también lo es en la Convención de Shanghai sobre la lucha contra el terrorismo, el separatismo y el extremismo. En conformidad con el artículo 3 de la Convención, los miembros de la Convención adoptarán las medidas necesarias para asegurar que los actos a que se alude en el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención no se sobrepasen por razones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otro tipo y que reciban sanciones proporcionales a su gravedad.

Comentarios de la fuente

56. En opinión de la fuente, la respuesta del Gobierno no trata debidamente las violaciones destacadas en la comunicación presentada en nombre del Sr. Jalilov.

57. La fuente sostiene que la detención, enjuiciamiento y condena del Sr. Jalilov fue fruto del ejercicio que hizo de sus derechos a la libertad de religión y de asociación internacionalmente protegidos. Se trata de un musulmán practicante que, antes de su detención, trabajaba para dar a conocer violaciones a la libertad religiosa en Uzbekistán, en particular la detención arbitraria de musulmanes independientes.

58. La fuente recuerda que el Gobierno debe "especificar la naturaleza concreta de la amenaza" que el libre ejercicio de los derechos fundamentales de una persona plantea para la seguridad nacional¹. A juicio de la fuente, en este caso, el Gobierno se limita en su respuesta a acusar sin pruebas al Sr. Jalilov de formar parte de una organización extremista. Este tipo de acusaciones sin información específica no satisface en absoluto el estricto requisito que obliga al Gobierno a "especificar la naturaleza concreta de la amenaza" para la seguridad nacional. Así pues, la justificación de la seguridad nacional no es de aplicación en este caso.

59. En el juicio, las declaraciones escritas presentadas por la Fiscalía para apoyar sus acusaciones indicaban tan solo que el Sr. Jalilov es un musulmán devoto y practicante y que había criticado el trato que el Gobierno dispensa a los musulmanes. Estas actividades están protegidas por el derecho internacional consuetudinario y codificadas por el Pacto en su artículo 18, párrafo 1 (libertad de religión), y su artículo 19, párrafo 2 (libertad de expresión).

60. En su descripción de los hechos, el Gobierno no aporta ningún dato concreto sobre los supuestos vínculos del Sr. Jalilov con organizaciones extremistas o con llamamientos a la violencia. Por eso, su juicio no se inscribe en las limitaciones previstas en los artículos 18, párrafo 3, y 19, párrafo 3, del Pacto, lo que confiere a su detención actual carácter arbitrario con arreglo a la categoría II.

61. Si bien en la respuesta se afirma que el abogado del Sr. Jalilov "pudo participar en el caso desde el momento de su detención" y que los abogados tuvieron la "oportunidad de comunicarse sin restricciones" con el Sr. Jalilov durante la instrucción, no niega que no se le permitiera al Sr. Jalilov reunirse con su abogado hasta dos meses después de su detención.

62. La fuente recuerda que el Comité de Derechos Humanos ha afirmado que "[e]l derecho a comunicarse con el defensor exige que se garantice al acusado el pronto acceso a

¹ *Sohn c. la República de Corea*, comunicación N° 518/1992, aprobada el 19 de julio de 1995, párr. 10.4.

su abogado"². En el caso *Musaev c. la República de Uzbekistán*³, el Grupo de Trabajo concluyó que existió una violación de categoría III cuando el detenido "no tuvo posibilidad alguna de comunicarse con un abogado durante más de diez días después de ser detenido".

63. En este caso, el Gobierno negó al Sr. Jalilov acceso a un abogado durante dos meses, superando de lejos el período exigido para el "pronto" acceso.

64. En opinión de la fuente, mientras que el Gobierno defiende que la causa contra el Sr. Jalilov fue dirimida con la participación de sus abogados, no niega que el tribunal no notificara el calendario de vistas al equipo jurídico del Sr. Jalilov en repetidas ocasiones. Tampoco niega que se celebrara al menos una vista, el 24 de noviembre de 2009, en ausencia del abogado del Sr. Jalilov.

65. Al negar al Sr. Jalilov acceso a un abogado durante dos meses tras su detención y, posteriormente, atentar contra su representación efectiva en algunas sesiones del juicio, el Gobierno ha violado su derecho a la asistencia letrada consagrado en el artículo 14, párrafo 3 b) y d).

66. La fuente sostiene que el Gobierno no niega específicamente que las tres vistas (el 24 de noviembre de 2009, 18 de enero de 2010 y el 8 de agosto de 2010) fueran a puerta cerrada en contravención del artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

67. El Gobierno en su respuesta no niega que violara el derecho del Sr. Jalilov a repreguntar a los testigos en sede judicial. Durante el juicio, la Fiscalía se basó en gran medida en las declaraciones escritas de testigos que no se pusieron a disposición del Sr. Jalilov para que los interrogara a pesar de sus reiteradas peticiones al tribunal.

68. La fuente también reitera las denuncias de que las autoridades sometieron al Sr. Jalilov a graves malos tratos violando así el artículo 7 del Pacto. Según la fuente, al someter al Sr. Jalilov a malos tratos en un intento por conseguir una confesión y al no investigar posteriormente esos actos, el Gobierno ha violado las protecciones consagradas en el artículo 7 del Pacto.

Deliberaciones

Categorías II y V

69. En su informe anual de 2004, el Grupo de Trabajo expresó su preocupación por que en algunos casos se use la detención por acusaciones de terrorismo para detener a disidentes religiosos y a otras personas que ejercen sus libertades de opinión, expresión, conciencia y religión⁴.

70. En los dos casos en que se condenó al Sr. Jalilov, se le declaró culpable de pertenecer a un grupo religioso extremista que perseguía difundir opiniones extremistas, de llamar a derrocar el Gobierno y de reclutar nuevos miembros.

71. Para respaldar las condenas, el Gobierno sostiene que el Sr. Jalilov fue declarado culpable sobre la base de declaraciones escritas presentadas por la Fiscalía en el juicio (los testigos no comparecieron durante el juicio para ser interrogados).

² Observación general N° 32 (2007) sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento N° 40*, vol. I (A/62/40 (Vol. I)), anexo VI, párr. 34.

³ Véase la opinión N° 14/2008 (Uzbekistán), párr. 40.

⁴ Véase "Situación relativa a la privación de la libertad como medida de lucha contra el terrorismo" en el Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (E/CN.4/2005/6), párr. 63.

72. Sin embargo, tal y como reconoce el Gobierno, según esas declaraciones, el Sr. Jalilov simplemente "expresó su malestar con las acciones del Gobierno y propagó ideas para cambiarlo".

73. El Gobierno no ha facilitado al Grupo de Trabajo ningún tipo de información específica que respalde los presuntos vínculos del Sr. Jalilov con organizaciones extremistas o con llamamientos a la violencia, lo que permitiría aplicar la limitación de derechos protegidos prevista en el artículo 18, párrafo 3, y el artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

74. El Grupo de Trabajo considera que en este caso el Sr. Jalilov fue privado de libertad por su condición de musulmán practicante y por sus críticas al trato que el Gobierno dispensa a los musulmanes independientes.

75. El Sr. Jalilov se vio privado de su libertad por haber ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de religión y expresión, proclamados en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 18, párrafo 1, y 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por ello, la privación de libertad del Sr. Jalilov se inscribe en la categoría II de detención arbitraria según la clasificación aplicada por el Grupo de Trabajo en el examen de los casos que se le presentan.

76. El Grupo de Trabajo también considera que en este caso el Sr. Jalilov fue privado de libertad por su condición de musulmán practicante por motivos de discriminación basada en la religión, lo que supone una violación de los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 18 y 26 del Pacto. Por ello, la privación de libertad del Sr. Jalilov se inscribe en la categoría V de detención arbitraria según la clasificación aplicada por el Grupo de Trabajo en el examen de los casos que se le presentan.

Categoría III

77. El Gobierno no niega que se violara el derecho del Sr. Jalilov a interrogar a los testigos de cargo como garantiza el artículo 14, párrafo 3 e), del Pacto. Durante el juicio, la Fiscalía se basó en las declaraciones escritas de testigos que no fueron puestos a disposición del Sr. Jalilov para que los interrogara a pesar de las reiteradas peticiones de este al tribunal.

78. Si bien el Gobierno afirma que el abogado del Sr. Jalilov "pudo participar en el caso desde el momento de su detención" y que los abogados tuvieron la "oportunidad de comunicarse sin restricciones" con el Sr. Jalilov durante la instrucción, no niega que, contraviniendo el artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto, no se le permitiera al Sr. Jalilov reunirse con su abogado hasta dos meses después de su detención.

79. Según el Comité de Derechos Humanos, el derecho a comunicarse con el defensor exige que se garantice al acusado el pronto acceso a su abogado⁵. El Grupo de Trabajo recuerda que en el caso Musaev (véase el párrafo 62 precedente), el Grupo de Trabajo concluyó que se viola el derecho que asiste a las personas en virtud del artículo 14 del Pacto cuando se les priva de su derecho a comunicarse con un abogado durante más de diez días a contar desde su detención.

80. El Grupo de Trabajo estima que el incumplimiento de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial en el caso que se examina, en particular del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 14, párrafo 3 b) y e), del Pacto, es de tal gravedad que confiere carácter arbitrario a la privación de libertad del Sr. Jalilov. Por ello, la privación de libertad del Sr. Jalilov se inscribe en la

⁵ Observación general N° 32 (véase nota 2 precedente), párr. 34.

categoría III de detención arbitraria según la clasificación aplicada por el Grupo de Trabajo en el examen de los casos que se le presentan.

Decisión

81. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Jalilov ha sido arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 7, 10 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y los artículos 14, párrafo 3; 18, párrafo 1; 19, párrafo 2; y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por ello, se inscribe en las categorías II, III y V de detención arbitraria según la clasificación aplicada por el Grupo de Trabajo en el examen de los casos que se le presentan.

82. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reparar la situación del Sr. Jalilov de modo que respete las normas y principios enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

83. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, la reparación adecuada sería poner en libertad al Sr. Jalilov y concederle el derecho efectivo a una indemnización con arreglo al artículo 9, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

84. De conformidad con el artículo 33, párrafo a), de los Métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo, el Grupo de Trabajo estima oportuno remitir las denuncias de tortura al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para que tome las medidas correspondientes.

[Aprobada el 30 de abril de 2013.]
